

La [Ley 43 de 1990](#), punto de partida del [Decreto reglamentario 2649 de 1993](#), que a su turno fue el piso de arranque de la [Ley 1314 de 2009](#), definió los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

Las normas de contabilidad y de información financiera definidas por la Ley 1314 mencionada forman parte de los PCGA colombianos. Basta leer su definición para darse cuenta de que compendia totalmente el contenido del Decreto 2649, citado, por el cual, precisamente, se expidieron los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

Ahora bien: que las normas de contabilidad y de información financiera definidas por la Ley 1314 formen parte de los PCGA no significa que las disposiciones expedidas en desarrollo de la Ley 1314 contengan todos los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, por la sencilla razón de que los estándares estilo IASB no versan sobre el subsistema documental de la contabilidad, elemento esencial de ésta.

No puede entonces afirmarse que cuando se hable de los PCGA deba entenderse que se alude a los marcos técnicos de información hoy en vigencia y a nada más.

Por lo tanto, tampoco estamos de acuerdo con lo sugerido en el numeral 5 del artículo que el CTCP ha planteado adicionar a nuestro decreto único reglamentario, que, por cierto, consideró mal denominado la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

Debido a la falta de educación continua de nuestros profesionales hay muchos que no conocen el movimiento histórico que ha vivido el país respecto de las normas de contabilidad y de aseguramiento. No entienden de donde vienen las cosas, ni para donde van. Formulan afirmaciones y hacen preguntas que ponen en evidencia su ignorancia. Así las cosas, está bien que se quiera usar las normas para culturizar, pero esto debe hacerse respetando la jerarquía del ordenamiento, es decir, primero la Constitución, luego los tratados y pactos internacionales, luego las leyes y finalmente los reglamentos.

Por lo mismo las normas no pueden alterar la ley que desarrollan, ni, como lo explicó la Sala nombrada, cambiar las leyes que versan sobre asuntos reservados al legislador (códigos, impuestos, derechos fundamentales).

La noción de generalmente aceptados se originó en los trabajos de Paul Grady, que realizó por encargo de la profesión contable de su país, el cual consistió en inventariar las prácticas utilizadas y definir las generalmente aceptadas. Luego muchas de esas prácticas, propias de la técnica, que se presume conocida por los profesionales de la contabilidad, fueron absorbidas y en ocasiones reemplazadas por normas legales, que, debido a su forzosa observancia, son también generalmente aceptadas. No hay país sin PCGA, pero los cuerpos de cada jurisdicción no son homogéneos.

Precisamente la búsqueda de cierta unidad o armonía justifica trabajos como los del IASB.

*Hernando Bermúdez Gómez*

La [Ley 43 de 1990](#), punto de partida del [Decreto reglamentario 2649 de 1993](#), que a su turno fue el piso de arranque de la [Ley 1314 de 2009](#), definió los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

Las normas de contabilidad y de información financiera definidas por la Ley 1314 mencionada forman parte de los PCGA colombianos. Basta leer su definición para darse cuenta de que compendia totalmente el contenido del Decreto 2649, citado, por el cual, precisamente, se expidieron los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

Ahora bien: que las normas de contabilidad y de información financiera definidas por la Ley 1314 formen parte de los PCGA no significa que las disposiciones expedidas en desarrollo de la Ley 1314 contengan todos los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, por la sencilla razón de que los estándares estilo IASB no versan sobre el subsistema documental de la contabilidad, elemento esencial de ésta.

No puede entonces afirmarse que cuando se hable de los PCGA deba entenderse que se alude a los marcos técnicos de información hoy en vigencia y a nada más.

Por lo tanto, tampoco estamos de acuerdo con lo sugerido en el numeral 5 del artículo que el CTCP ha planteado adicionar a nuestro decreto único reglamentario, que, por cierto, consideró mal denominado la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

Debido a la falta de educación continua de nuestros profesionales hay muchos que no conocen el movimiento histórico que ha vivido el país respecto de las normas de contabilidad y de aseguramiento. No entienden de donde vienen las cosas, ni para donde van. Formulan afirmaciones y hacen preguntas que ponen en evidencia su ignorancia. Así las cosas, está bien que se quiera usar las normas para culturizar, pero esto debe hacerse respetando la jerarquía del ordenamiento, es decir, primero la Constitución, luego los tratados y pactos internacionales, luego las leyes y finalmente los reglamentos.

Por lo mismo las normas no pueden alterar la ley que desarrollan, ni, como lo explicó la Sala nombrada, cambiar las leyes que versan sobre asuntos reservados al legislador (códigos, impuestos, derechos fundamentales).

La noción de generalmente aceptados se originó en los trabajos de Paul Grady, que realizó por encargo de la profesión contable de su país, el cual consistió en inventariar las prácticas utilizadas y definir las generalmente aceptadas. Luego muchas de esas prácticas, propias de la técnica, que se presume conocida por los profesionales de la contabilidad, fueron absorbidas y en ocasiones reemplazadas por normas legales, que, debido a su forzosa observancia, son también generalmente aceptadas. No hay país sin PCGA, pero los cuerpos de cada jurisdicción no son homogéneos.

Precisamente la búsqueda de cierta unidad o armonía justifica trabajos como los del IASB.

*Hernando Bermúdez Gómez*

**E**n su proyecto de simplificación el Consejo Técnico de la Contaduría Pública propone un artículo nuevo del siguiente tenor: “*Artículo 1.3.1.1. Normas que deben aplicar los contadores públicos. —Los Contadores Públicos estarán obligados a: —1) Observar las normas de ética profesional que incluyen lo establecido en la Ley 43 de 1990 y las expuestas en el presente Decreto relacionadas con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad, así como las Normas sobre Control de Calidad; —2) Actuar con sujeción a las Normas de Aseguramiento de Información (cuando otras normas se refieran a Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, se entenderán referidas a las Normas de Aseguramiento de Información) cuando se dictaminen estados financieros de propósito general en calidad de revisor fiscal o como contador público independiente; —3) Cumplir las normas legales vigentes; —4) Actuar con sujeción a la Norma de Servicios Relacionados 4410 cuando se actúe como contador que certifica estados financieros de propósito general y observando el alcance establecido por el artículo 37 de la Ley 222 de 1995; —5) Vigilar que el registro e Información contable se fundamente en Normas de Contabilidad y de Información Financiera, según corresponda (cuando otras normas se refieran a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, se entenderán referidas a las Normas de Contabilidad y de Información Financiera).*”

Las obligaciones fundamentales de los contadores públicos colombianos están previstas en el texto vigente del artículo 8 de la [Ley 43 de 1990](#). Está claramente

establecido por la Constitución Política que las leyes pueden ser reglamentadas. No tiene un real valor decir que las normas éticas del país son tanto las legales como las reglamentarias. En cambio, si es una tergiversación decir que las normas de ética incluyen las normas de calidad. En la estructura del IAASB las normas éticas están por encima de todas las normas del citado consejo. Luego, es decir, en segundo nivel, se encuentran las normas de administración y control de la calidad, después, en tercer nivel, las normas sobre los contratos de aseguramiento y, finalmente, las normas sobre servicios relacionados. Esta estructura no fue recogida tal cual por la [Ley 1314 de 2009](#), que decidió apoyarse en los contenidos del artículo 7 de la Ley 43 de 1990 e incorporó en las normas de aseguramiento de información las normas éticas, normas de control de calidad de los trabajos, normas de auditoría de información financiera histórica, normas de revisión de información financiera histórica y normas de aseguramiento de información distinta de la anterior. Esta descripción no puede ser cambiada por decretos que se traten de expedir con fundamento en la propia ley 1314 mencionada.

Tampoco puede asimilarse la parte al todo. Las normas de auditoría generalmente aceptadas equivalen a lo que hoy se denomina normas de auditoría para información financiera histórica, que forman parte, pero no equivalen, a las normas de aseguramiento de información.

*Hernando Bermúdez Gómez*

**E**n notas anteriores de Contrapartida hemos planteado que las empresas privadas, es decir, las que no tienen interés público, deberían dividirse en dos: las grandes y las medianas y, por el otro lado, las pequeñas y las microempresas. De esta manera creemos que se lograría que el marco de contabilidad denominado NIIF para las Pymes tenga un campo de aplicación más adecuado a la realidad de las entidades y a las necesidades de los usuarios.

En cuanto a las pequeñas y las microempresas de tiempo atrás hemos sostenido que para muchas bastaría llevar una contabilidad sobre la base de caja, no porque sea más fácil o menos costosa, sino porque efectivamente es la que refleja la realidad de su operación, en un país en el cual casi todas las entidades son pequeñas o micro. Así se propuso en los proyectos que originaron la Ley 1314 de 2009 (véase Gaceta del Congreso 106 lunes 9 de marzo de 2009 Página 11). Lo que entonces no se aprobó vino a establecerse por la [Ley 2069 de 2020](#), que reformó, precisamente, el artículo 2 de la ley antes citada.

Entonces hay que establecer un recorrido claro para que las empresas pasen de una base de caja a una mixta y finalmente asuman una contabilidad por acumulación.

Si una empresa todo lo hace en efectivo y no tiene inversiones, ni propiedades, ni préstamos de terceros (es decir, que no sean del núcleo familiar vinculado a la explotación, o de los miembros, asociados o partícipes) cabría pensar que utilice la base de caja. Si logra adquirir algún activo que dé lugar a calcular réditos o contribuciones a la

generación de los ingresos, o intereses a favor de prestamistas, procedería un sistema mixto. Si finalmente aumenta su capital de operación y pasa a financiar sus activos en pasivos que superen el patrimonio, debería utilizar una base de acumulación. Estos criterios se pueden afinar, pero transmiten la idea de ir con el sistema contable reflejando la verdadera complejidad de la empresa.

Correlativamente el sistema documental debe también ser sencillo o complicado según el grado de desarrollo de la entidad.

Sabemos de muchos que arrancan el día con un dinero en el bolsillo, trabajan todo el día vendiendo o prestando servicios, pagando su propia alimentación y algunas otras cosas necesarias que se compran de contado, que al final del día se preguntan cuanto tienen de más o de menos con lo que empezaron al amanecer. Llevan la contabilidad en su cabeza y es probable que con registros simples sea suficiente. Alguno logra destinar parte de sus recursos a la compra de una casa o apartamento, a su amoblamiento, al sostenimiento de una familia, que son dineros que pueden retirarse de la explotación sin perjudicarla. La compra de un vehículo suele orientarse a apoyar la generación de los ingresos, pero simultáneamente mejora la calidad de vida. Tal vez aún no han cambiado las cosas. Pero si se contratan empleados y se adquieren créditos ya habrá unos terceros muy interesados en los flujos de efectivo futuros y necesitarán una información que les permita hacer estas predicciones. Es cuestión de meditar sobre la realidad.

*Hernando Bermúdez Gómez*

Sobre los procesos de transición, que inician con el anuncio al público de la intención de introducir los cambios, que continúan con la preparación simultánea de estados bajo el marco anterior y el nuevo, debe pensarse si esto es un ejercicio muy costoso o innecesario.

La cuestión no puede resolverse solamente desde la perspectiva del costo. Ya se sabe que los procesos de cambio son costosos, sobre todo si se lleva lo que ordinariamente se conocen como paralelos.

El punto consiste en asegurar que el sistema contable efectivamente opere bajo un nuevo marco y que los datos transmitidos al público sean claros.

Hay quienes prefieren probar hasta estar seguros y hay quienes optan por ahorrarse los costos de llevar un paralelo y deciden cambiar a un corte, enfrentándose a hacer ajustes y corregir errores, si es que se presentan.

Esas perspectivas internas no son las únicas que deben tenerse en cuenta. Hay que pensar en los terceros y establecer si para ellos las cosas resultarán transparentes.

Está claro que por razones de comparación el cambio de criterios puede hacer imposible llegar a conclusiones confiables. No solemos pensar en el rompimiento de las series para propósitos de investigación.

No parece suficiente el simple anuncio del cambio, ni la explicación redactada sobre los métodos, anterior y posterior. Muchas veces es necesario acudir a cuantificar los impactos, a nivel de cuenta y de resultado.

Otro asunto que debe pensarse es el tratamiento que deben aplicar las empresas cuando cambian de rango, pero estiman que ello puede ser de corta duración. Por lo general los empresarios se rehúsan a hacer cambios. Es decir ¿debería haber un periodo de confirmación para adoptar un marco más complejo de información?

En el escenario de la pandemia muchas empresas seguramente presentarán situaciones muy complicadas. La pregunta es ¿superada la calamidad se tratará de reactivar la empresa? O ¿definitivamente se le desmontará? Nuevamente vemos que los criterios de tamaño de activos o de empleados no son muy convenientes.

Una empresa debe preguntarse cuáles serían los cambios que tendrían que hacerse si se pretendiera acoger un marco más complejo o simple. Identificados los efectos debe establecerse si ellos deben considerarse materiales, lo cual significa pensar desde los usuarios y no desde la entidad preparadora. Si efectivamente hay importancia no deberían escatimarse explicaciones. Si no, podría pensarse en que es demasiado cumplir todos los pasos de una transición.

Hecho lo anterior si cabe pensar en cómo garantizar que el sistema de contabilidad opere debidamente y si conviene o no cambiar de herramienta o si simplemente hay que darle un uso distinto a la que se tiene. Si hay que cambiar la herramienta la experiencia nos ha enseñado que es mejor seguir funcionando con el modelo antiguo hasta que el nuevo pueda considerarse listo.

*Hernando Bermúdez Gómez*

**H**ace mucho tiempo las autoridades de supervisión advirtieron que las entidades se modificaban para colocarse en las situaciones más favorables. Esta problemática se originó por el hecho de crear umbrales a partir de los cuales se daría lugar a una carga, a una obligación, a tener que someterse a cierto régimen. Para evitar estos deslizamientos se tomaron medidas como tomar como referencia situaciones anteriores ya consolidadas u obligar a las personas a permanecer en cierto estado por un tiempo.

En las normas de contabilidad y de información financiera actuales existe un período de tres años para poder cambiar de grupo. No parece que aquí obren las mismas razones que estaban presentes en las situaciones aludidas en el párrafo anterior.

Nuevamente debemos abogar porque la cuestión se analice desde la teoría contable. El objetivo fundamental es que la información contable refleje la realidad económica del respectivo ente. Si se admite como supuesto que los denominados marcos normativos cumplen con esa exigencia no se ve porque obligar a la que se denominó permanencia.

Sin embargo, una cosa son los marcos como expresiones abstractas y otra la situación financiera como medida de realidades. Definitivamente hay entidades que no muestran la realidad cuando aplican el valor histórico. Es errado seguir pensando que ese sistema es correcto.

De otra parte, siendo la contabilidad una herramienta de gestión empresarial, está

subordinada a la máxima de lograr beneficios mayores a los respectivos costos y gastos. Desde este punto de vista no resulta adecuado obligar a una persona a preparar una información excesiva, no esperada o demandada por los terceros interesados en su información.

En suma, parece que no conviene ordenar a las entidades a obrar de cierta manera. Más bien debería dejárseles obrar según los principios. Algunos reaccionarán recordando que “creada la ley, creada la trampa”. Esto nos hace pensar que en algunos países existen auditorías especiales que se centran en asuntos concretos. Es decir: las autoridades podrían recurrir a un asegurador para que opine si estaban dadas las condiciones que aconsejaban cambiar de marco.

La verdad es que las normas actuales implican que el mejor marco es el de las normas completas y que el más débil es el expedido para las microempresas. Desde este punto de vista se entiende que se autorice a adoptar un marco más complejo, pero se obligue a permanecer en uno si se quiere pasar a uno más débil.

Las normas tienen que pensarse para servir debidamente a unas situaciones concretas. La pregunta es si los tamaños de activos o de empleados son las variables adecuadas para definir la base contable. Nosotros pensamos que no.

Hay que profundizar más desde la teoría contable sobre la escalabilidad.

*Hernando Bermúdez Gómez*

Todas las empresas deberían explicar en su nota de políticas contables las razones por las cuales aplican cierta base contable, indicando si lo hacen por obligación o voluntariamente. Esto es mucho más que mencionar el número de un grupo.

Si se tienen en cuenta la variedad de criterios que señala la legislación colombiana, las apariencias pueden no ser apropiadas para deducir la base que deba aplicarse. En ciertos departamentos operan entidades que donde se encuentran son de gran importancia socioeconómica, que si se trasladaran a otra parte perderían esa notoriedad.

Los criterios no pueden ser solo algunos de los mencionados en la Ley porque al aplicarlos se desconocerán los no escogidos.

Siempre hay que tener en mente los usuarios de la información. Por lo mismo son sospechosas las modificaciones que se justifican desde la perspectiva de los preparadores.

Hay que reflexionar a fondo sobre la NIIF para las Pymes. Se trata de una regla muy simplificada, en la que se da gran efecto al principio de beneficios mayores al costo de producción de la información, la más de las veces aludiendo al costo o esfuerzo desproporcionado. No parece, entonces, ser una base muy complicada ni costosa, si se le aplica íntegramente.

Más bien parece que en su afán de simplificar llega a contemplar unas prohibiciones que no son razonables, como se demostró con la valoración de las propiedades, planta y equipo. Tenemos que

insistir en que el principio principal es el de realidad, esencia o sustancia económica y no el cumplimiento de disposiciones. Por muy legal que sean las reglas aplicadas por sí mismas no garantizan mostrar la imagen fiel de la situación ni de las operaciones.

Entendemos que muchas operaciones se llevan a cabo considerando intangibles como el buen nombre, el conocimiento de la industria, los procedimientos administrativos, que pueden no estar reconocidos por la contabilidad financiera. En países con tantas empresas familiares, la buena fama del líder familiar puede ser la verdadera arma para atraer capitales, créditos, ingresos y réditos. Por tanto, el patrimonio podría no ser tan fundamental. Pero lo que no se reconoce ni se mide, bien podría ser objeto de revelaciones, que ayudaran a mostrar esa verdadera imagen mencionada.

También sabemos que el pago oportuno tiene un efecto mucho mayor al de otros indicadores de confianza en el mercado. Además, hay quienes compran de contado y quienes hacen normalmente anticipos. Por lo tanto, el análisis no debe centrarse tanto en el balance o en el estado de desempeño como el flujo de efectivo sobre todo si se calculara por el método directo. Investigaciones han establecido que el efectivo es la principal preocupación de los empresarios.

Repetimos: simplificar por simplificar puede rebajar costos de preparación, pero no mejorar la información.

*Hernando Bermúdez Gómez*

**S**e propone por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública que se siga estableciendo: *“Los portafolios de terceros administrados por las sociedades comisionistas de bolsa de valores, los negocios fiduciarios y cualquier otro vehículo de propósito especial, administrados por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, deberán establecer contractualmente si aplican o no los marcos técnicos normativos vigentes para el grupo 1;”*

Hay portafolios que permiten el ingreso y retiro en cualquier momento, que se caracterizan por ofrecer buena rentabilidad, además de una alta liquidez. Así las cosas, no parece apropiado que se deje a las entidades que los administran, que usualmente determinan el clausulado del respectivo contrato, que decidan si aplican o no las NIF completas. Aquí pudiera estar presente la necesidad de proteger a los actuales y eventuales participantes, de la misma manera que se hace con otras modalidades de desempeño dentro del mercado de capitales.

A estas alturas pensamos que la propuesta de simplificación del CTCP debería expresar cuando las disposiciones propuestas se apartan de lo establecido en las normas internacionales. En Colombia no se aplican las NIIF sino las NIF pues solo son exigibles las que hayan sido incorporadas al derecho contable colombiano. Siempre es necesario tener claro en qué somos iguales y en qué distintos, como está sucediendo mientras ponemos en vigencia normas expedidas con entrada en rigor anterior a su incorporación.

Conviene meditar mucho sobre los cambios en las bases contables. Pensaríamos que las empresas tratan de conservar sus estructuras para evitar todo lo que suponen las modificaciones. En primer lugar, una hipótesis es la de la expansión que implica adoptar un marco más complejo. En segundo lugar, se encuentra la hipótesis de la contracción, que abre las puertas a aplicar un marco menos complejo. Se considera que voluntariamente una entidad puede aplicar normas más complejas. Con todo, no faltarán los que cambien cada vez que les toque o puedan. Estas modificaciones de gran envergadura pueden ser de difícil entendimiento y pueden desproteger a ciertas partes vinculadas, si desaparecen menciones o explicaciones que en el nuevo estado no serían obligatorias. No nos parece adecuada la generalización. Deberían ser las circunstancias concretas, como la cantidad y materialidad de los cambios, los que sirvieran de base para realizar un proceso de transición formal o tratar la cosa como cambios en las políticas contables. Si se teme que las entidades actúen fraudulentamente puede señarse que necesariamente las autoridades de supervisión verifiquen el cambio desde la perspectiva de las exigencias conceptuales y la protección del bien común.

Las empresas grandes y medianas deberían conformar un grupo distinto al de las pequeñas y microempresas. De esta manera la NII para las Pymes promulgada por el IASB sería de más razonable aplicación en nuestro medio.

*Hernando Bermúdez Gómez*



**A**lgunos grupos obligan a todos sus componentes llevar la contabilidad de una misma forma. Incluso a veces las herramientas computacionales son las mismas. Sin embargo, el IASB admite que puede no ser así. En la norma sobre Estados financieros consolidados se lee: *“Si un miembro del grupo utiliza políticas contables diferentes de las adoptadas en los estados financieros consolidados, para transacciones y otros sucesos similares en circunstancias parecidas, se realizarán los ajustes adecuados en los estados financieros de los miembros del grupo al elaborar los estados financieros consolidados para asegurar la conformidad con las políticas contables del grupo.”* Puede suceder que la legislación exija ciertos reconocimientos y mediciones, obligando a la entidad a llevar varias series, cada una con un criterio contable. Esto nos permite sostener que hoy hay sistemas de información muy complejos, en los que se lleva la contabilidad según diferentes marcos, incluyendo los tributarios y los que deban observarse para informar a ciertas entidades. Además, el sistema de información debe responder a todas las manifestaciones contables, incluyendo las propias de la contabilidad administrativa. No es, como algunos lo creen, que todo deba estar sometido a la contabilidad financiera.

En este escenario hay que reflexionar cuidadosamente sobre los derechos de los socios minoritarios, cuyo monto podría cambiar según los criterios de reconocimiento y medición. No es válido que la mayoría cause daño a la minoría.

Los socios minoritarios pueden tener pequeñas inversiones en parecer de los controlantes. Pero para ellos pueden ser grandísimas. El buen gobierno de las empresas y su rendimiento son asuntos muy importantes para ellos. Mientras los controlantes logran acceso total a los minoritarios se les restringe al derecho de inspección, el cual incluye los estados financieros y estos sus notas. Cuando se aplica un marco contable de pocas revelaciones se crece la asimetría informativa entre los grandes y los pequeños. Informes sobre las operaciones con partes vinculadas pueden adquirir una importancia suma.

Así pues, al hablar de simplificación hay que pensar detenidamente en los efectos para los terceros, empezando por los socios minoritarios, los empleados, los proveedores y los prestamistas. Mucho tiempo, casi un siglo, ha tomado a la humanidad repensar los derechos a la intimidad y a la información. No está bien ayudar a los grandes a actuar como les parezca, pues esa no es la regla que supone el respeto por los derechos en lo sustancial y no en lo meramente formal.

La reducción de costes propia de una verdadera simplificación no es por sí misma suficiente causa para llevarla a cabo. Deben cumplirse las demás exigencias de lo contable. Entre ellas la de informar a terceros que no tienen acceso a los libros y demás documentos de una entidad. Un minoritario muchas veces está preso, pues nadie compra su parte.

*Hernando Bermúdez Gómez*

**L**a Norma para Pymes enfatizó: “A menudo, las PYMES producen estados financieros para el uso exclusivo de los propietarios-gerentes, o para las autoridades fiscales u otros organismos gubernamentales. Los estados financieros producidos únicamente para los citados propósitos no son necesariamente estados financieros con propósito de información general.”

En Colombia todas las sociedades deberían obedecer la [Ley 222 de 1995](#), a cuyo tenor “Dentro del mes siguiente a la fecha en la cual sean aprobados, se depositará copia de los estados financieros de propósito general, junto con sus notas y el dictamen correspondiente, si lo hubiere, en la Cámara de Comercio del domicilio social. Esta expedirá copia de tales documentos a quienes lo soliciten y paguen los costos correspondientes. (...)” Nos parece que poquísimos cumplen esta norma, aprovechando que las autoridades no la hacen cumplir.

Planteadas las cosas como lo hemos hecho, cabe preguntarse: ¿Qué tratamiento debe darse a las empresas grandes que no son públicas, que no realizan operaciones internacionales y si participan de los mercados de capitales internos? En varios países aplican las normas para Pymes.

El CTCP ha planteado que se excluyan del grupo 1 las entidades que hoy se enuncian de la siguiente manera: “3. Entidades que no estén en los numerales anteriores, que cuenten con una planta de personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos

*mensuales legales vigentes (SMMLV) y que, adicionalmente, cumplan con cualquiera de los siguientes parámetros: —3.1. Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF plenas. —3.2. Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIIF plenas. —3.3. Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen NIIF plenas. —3.4. Realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las compras o de las ventas respectivamente.”*

Las circunstancias de la matriz no parecen ser un criterio adecuado para determinar los estándares que deben aplicar las subordinadas ni la misma matriz. Sencillamente las normas plenas se hicieron y hacen para empresas públicas internacionales. Por analogía caben las empresas públicas nacionales. Pero las subordinadas o la matriz de alguna empresa pública bien pueden no participar en los mercados públicos y, además, pueden ser medianas, pequeñas o microempresas. Nos parece que con autorizar que voluntariamente se utilicen las normas completas bastaría para facilitar el manejo contable de estas empresas. En cuanto a las importaciones y exportaciones debe considerarse que no son operaciones que se ofrezcan o demanden del público, sino de empresarios determinados, por lo que es más posible que se apoyen en estados financieros de propósito especial. Claramente deberían poder voluntariamente aplicar las normas completas.

Hernando Bermúdez Gómez

Las diferencias entre las entidades que operan en Colombia no necesitan probarse, aunque es bueno estar al tanto de sus estadísticas. La [Ley 1314 de 2009](#) expresamente indicó que al definir la intervención económica deben considerarse su tamaño, el volumen de sus activos, de sus ingresos, el número de sus empleados, su forma de organización jurídica, el sector al que pertenecen, sus circunstancias socioeconómicas y el interés público involucrado en su actividad.

Las diferencias no justifican por sí mismas que existan diferentes normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento de información. En cuanto a las primeras el principio fundamental no es que les cueste poco trabajo llevar la contabilidad, sino que con base en esta pueda mostrarse su esencia, sustancia o realidad económica, de la cual forma parte la realidad de las operaciones, que ahora menciona el artículo 2 de dicha ley, como consecuencia de la reforma que le introdujo la [Ley 2069 de 2020](#).

En desarrollo de ese principio principal, las normas deben procurar que la información sea comprensible, transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones económicas. La simplicidad, por sí misma, tampoco garantiza la realización de estas características.

Por otra parte, sean cuales fueren las normas, su finalidad político-jurídica, es mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la actividad empresarial. Tampoco la simplicidad, por sí misma, es garantía de lograr esta finalidad.

Siempre que se repete la diversidad, se refleje la realidad, se satisfagan las cualidades de la información y se logre el propósito político – jurídico que se les asignó, la simplicidad es procedente porque tratándose de una actividad económica, empresarial, los beneficios que se deriven de la información deben ser mayores que el costo de producirla.

Al tomar como punto de referencia los estándares expedidos por el IASB debemos precisar para quién fueron pensados. Según el prólogo *“Las Normas están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros con propósito de información general, así como en otras informaciones financieras de las entidades con ánimo de lucro.”* [En un primer momento](#) el CTCP pensó en dividir los obligados en varios grupos, uno de los cuales sería conformado por las entidades sin ánimo de lucro, pero finalmente resolvió no tener en cuenta esta naturaleza jurídica. En nuestro criterio el tiempo ha demostrado que la mayoría de las veces esa posición no es apropiada, como nosotros sostuvimos desde un principio.

A renglón seguido el prólogo señala: *“El objetivo de los estados financieros con propósito de información general es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa que sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad.”* Por lo tanto, las normas tienen un claro perfil financiero, para quienes participan en el mercado público.

Hernando Bermúdez Gómez